

# La sentencia del Tribunal Constitucional sigue levantando polémica

## Las palabras del conselleiro Fernández Barreiro vuelven a crear tensión en la Xunta

**Santiago (Redacción).** Las palabras del conselleiro de Cultura y Bienestar Social de la Xunta de Galicia, Alejandro Fernández Barreiro, en las que sostenía que no existen contradicciones entre las declaraciones del titular del gabinete autónomo y la del Consello da Cultura Galega, valorando la sentencia del Tribunal Constitucional que impugnó el deber de conocer el idioma gallego, han vuelto a crear tensión en la vida del ejecutivo que preside Gerardo Fernández Albor. Este, por su parte, eludió pronunciarse en el día de ayer sobre el fallo del Tribunal Supremo que rechaza la exigencia de conocer el gallego para ser funcionario en Galicia, y se ratificó en la postura que hiciera pública con motivo de la conmemoración del cincuentenario del Estatuto de 1936 y en la que reclamaba el «deber» de todos los gallegos de usar y conocer aquel idioma.

Las afirmaciones del primer responsable cultural de la Administración autonómica han vuelto a causar «malestar» y «disgusto» en el Palacio de Raxoi, donde sí se piensa que «hay claras diferencias» entre las declaraciones de Fernández Albor y las del organismo que preside Ramón Piñeiro. Asimismo, han venido a poner de relieve, por su reincidencia, que el Gobierno autónomo carece de una interpretación homogénea sobre los impactos que el fallo del Alto Tribunal supondrá al idioma gallego y que, en consecuencia, adolece de una voluntad política unificada para hacerle frente a los mismos.

Ayer se reprodujeron las críticas por el comportamiento de Fernández Barreiro, a quien fuentes solventes del Gobierno gallego calificaron de «impresentable» y de intentar un «engaño», comprometiendo la credibilidad política del presidente Albor con tal de salvar su actuación personal en el Consello da Cultura Galega. Las mismas fuentes dijeron que el titular de Cultura y Bienestar Social se había «colocado ante una evidencia y ahora dice que esa evidencia no existe».

Las censuras al conselleiro de Cultura y Bienestar Social no sólo se dirigen al «contenido» de sus afirmaciones, sino también al hecho de que, con su reciente actitud en el Consello da Cultura Galega aún caliente, hubiese comparecido notoriamente ante los medios de comunicación gallegos en compañía del presidente nacional del Partido Demócrata Popular, Oscar Alzaga, y del gallego y titular de la Diputa-

ción de La Coruña, Enrique Marfany Oanes, atrayendo de esta forma sobre sí las preguntas de los informadores.

### Evitar conflictos entre los socios de Coalición Popular

El presidente de la Xunta se ha mostrado sorprendido por el hecho de que las «llamadas a capítulo» que le hizo al titular de la cartera de Cultura y Bienestar Social no hubiesen surtido efecto ninguno. Gerardo Fernández Albor, al tiempo que declina toda responsabilidad en el comportamiento de su conselleiro, se ratifica en los términos de la declaración institucional que realizó con motivo del cincuentenario del Estatuto de 1936. Y, de hecho, los hombres más cercanos al jefe del gabinete autónomo tratan de desvincularle ahora de la polémica originada por Fernández Barreiro, diciendo que «el presidente fijó la postura política del Gobierno gallego y se mantiene en ella con rotundidad».

Parece, en cambio, remota la posibilidad de que Gerardo Fernández Albor plantee como necesario el cese de Alejandro Fernández Barreiro, ante la disparidad de criterios de que éste ha hecho gala respecto de su máximo responsable político en el Gobierno. Ello es así por un deseo explícito del presidente de la Xunta de mantener a toda costa el buen estado actual de las relaciones con el Partido Demócrata Popular, al que pertenece Fernández Barreiro, así como al de evitar nuevos conflictos entre los socios de la Coalición Popular.

Los círculos influyentes de Raxoi consideran, en cambio, que el

conselleiro de Cultura sí ha de asumir el costo político de su comportamiento. Pero todo lo que entienden por «costo», en este caso, es la comparecencia de Fernández Barreiro ante el Parlamento de Galicia para dar cuenta de su actitud, tras una interpelación presentada por el diputado del grupo mixto Camilo Nogueira.

### El Pedrón de Ouro rechaza la sentencia

Por otra parte, el Patronato del Pedrón de Ouro, en una sesión extraordinaria celebrada en Santiago, decidió rechazar públicamente la sentencia del Tribunal Constitucional ya que entienden que, al eludir la obligación del deber de conocer el gallego, va en contra de los derechos fundamentales de Galicia como comunidad nacional.

Esta misma asociación acordó solicitar públicamente la dimisión de todos los miembros del Consello da Cultura Galega «por se teren manifestado dun xeito que traiciona os fins para os que foi creado». Al mismo tiempo, insta al Parlamento de Galicia para que modifique su ley constitutiva, con el objeto de impedir la manipulación y la perpetuación de los cargos en dicho organismo.

Por último, el Patronato del Pedrón de Ouro decidió pedir a Domingo García Sabell, delegado del Gobierno central en Galicia y presidente de la Real Academia Galega, la dimisión de este último cargo por su «sorprendente docilidad ó Gobierno central, frente ós inalienabeis dereitos lingüísticos da nación galega».